

fecha de su formal prision, sin hacer declaracion sobre indemnizacion civil, por no constar exista á quien legalmente deba aplicarse. Hágase saber, y remítase á la superioridad para su revision. Así definitivamente juzgando, lo decretó el C. Lic. José M^a Castellanos, juez 5^o de lo criminal de esta capital, y firmó.—Doy fe: José M. Castellanos.—V. Cunalizo, secretario.

Pasó la causa á revision á la 3^a Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, que tomando en consideracion el nombramiento que el juez de la causa hizo de oficio en los defensores de algunos de los reos, sin haberse insistido en que estos fueran notificados para que nombraran á persona ó personas de su confianza, y sin haberseles mostrado la lista de los abogados de pobres para el mismo efecto, pronunció el auto que á continuacion se inserta. A consecuencia de este auto, queda pendiente de resolucion la sentencia definitiva.

México, Julio 25 de 1871.

Apareciendo de la vista que el ciudadano juez de letras de Tlalpam, en auto de 16 de Octubre de 1869, nombró de oficio defensores á los reos Ignacio Hernandez, Severiano Neri, Alejandro Zaldívar, Cecilio Neri, Martin Gonzalez, Paulino Gonzalez y á Fermin Neri, sin haber insistido en que se les notificara que nombraran para tal encargo á la persona ó personas de su confianza, y sin haber siquiera mostrádoles la lista de los abogados de pobres, para que eligieran al que les conviniera: que si bien este defecto quedó después subsanado respecto de Zaldívar, quien nombró por fin al C. Lic. Antonio Ramirez; de Martin Gonzalez, que nombró al C. Lic. Justo Sierra; de Paulino Gonzalez, que aprobó expresamente el nombramiento que de oficio hizo el ciudadano juez 5^o de lo criminal, Lic. José M^a Castellanos, en el C. Lic. Manuel Mateos Alarcon, diciendo á fs. 33, vuelta, que obtenia éste toda su confianza; y de Fermin Neri, quien posteriormente nombró al C. Lic. Genaro Raigosa; resulta que subsiste en cuanto á Ignacio Hernandez, quien ha sido defendido por el C. Lic. Manuel Olaguibel; Severiano Neri, á quien defendió en primera instancia el C. Lic. Pablo Vigueras; Cecilio Neri, defendido por el C. Lic. Manuel Prieto; y Antonio Heredia, defendido por el C. Lic. Francisco T. Gordillo; siendo de adver-

tir, respecto de este último, que habiendo nombrado al C. Lic. Cirio Tagle, y aceptado éste su encargo, despues sin expresarse la causa, y sin haberse hecho saber al reo, lo defendió el expresado C. Gordillo: no hay duda que tal procedimiento es causa de nulidad, á juicio de la Sala, conforme al art. 58, frac. 1^a de la ley de 15 de Junio de 1869, por haberse violado la 5^a del art. 20 de la Constitucion federal, que previenen expresamente se oiga á los reos en defensa, por sí ó por personas de su confianza ó por ambos, segun su voluntad, y que en caso de que no tengan quien los defiendan, se les presentará lista de los defensores de oficio para que elijan el que ó los que les convenga: que los términos generales de este precepto constitucional, así como la falta de distincion en el citado art. 58 de la ley de jurados, hace que no se pueda evitar proponer la nulidad, aun cuando los reos no hayan reclamado el nombramiento expresado, supuesto de que además de que la ley no distingue, el art. 55 de la mencionada ley de 15 de Junio, al autorizar á la Sala para que de oficio califique que hay algun motivo de nulidad, es claro que presupone el caso de que ninguna de las partes haya reclamado; y teniendo por último presente, que se trata de una causa grave en que se ha impuesto la pena capital á Hernandez, Severiano Neri y á Antonio Heredia; que han sido defendidos por personas á quienes no nombraron, sin que precedieran los requisitos señalados por la ley. Por estas consideraciones y fundamentos legales expresados, se declara: que á juicio de la Sala es motivo de nulidad el que los reos Ignacio Hernandez, Severiano Neri, Antonio Heredia y Cecilio Neri, hayan sido defendidos por personas á quienes no nombraron, y por no haberse practicado lo que previene el art. 20, frac. 5^a de la Constitucion, presentándoles la lista de los defensores de oficio para que eligieran en el caso de que hubieran manifestado que no tenían quien los defendiera. En consecuencia, pase la causa á la 1^a Sala de este Superior Tribunal, previa citacion.

Así lo proveyeron por unanimidad los ciudadanos presidente y magistrados que forman la 3^a Sala del Tribunal Superior del Distrito.—Echenique.—Herrera.—Moreno.—José P. Mateos, secretario.

EL DERECHO

PERIÓDICO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION

SEGUNDA ÉPOCA.

S'il n'y avait pas de justice,
il n'y aurait ni gouvernement ni société.
EDOUARD LABOULAYE.

TOMO I.

MÉXICO: SÁBADO 19 DE AGOSTO DE 1871.

NÚM. 33

SUICIDIO.

ARTICULO II.

En la mayor parte de los códigos españoles no se hace mencion de este delito. Se trata de él en el tit. 27 de la P. 7.^a, y es notable el proemio de dicho título, que solo califica de pecado el acto del que por *desesperacion* muere: y en la ley 1.^a, definiendo la palabra *desesperamiento*, dice: que, «es cuando el ome se desfinza ó se desampara de los bienes de este mundo e del otro, aborreciendo su vida, e cobdiciando su muerte:» distingue y define cinco maneras de desesperacion. En la ley 2.^a que trata de la pena, se refiere á la 24, tit. 1.^o de la misma Partida, por la que se castigaba con la pena de confiscacion á los que, acusados de algun delito que mereciera pena capital, se mataban por miedo de la pena, ó de la infamia que de ella debia resultarles; y si bien esta sancion era demasiado severa y recaía no sobre el suicida, sino sobre los ascendientes ó colaterales, inocentes del todo al hecho que motivaba la confiscacion, era ménos desacertada que la ley 15, tit. 21, lib. 12, Nov. Rec., pues en ésta no se hace distincion alguna de los motivos que hayan impulsado á una persona para privarse á si mismo de la vida. «Todo hombre ó mujer, dice, que se matare á si mismo, pierda todos sus bienes, y sean para nuestra cámara no teniendo herederos descendientes.»

En las legislaciones modernas no se ha enumerado el suicidio entre los delitos lega-

les, por mas grave que sea este acto y contrario á los ojos de la razon; así es que en algunos códigos solo se castiga al que prestare á otro auxilio para que se suicide, lo que es conforme á lo que disponia la ley 10, tit. 8, P. 7.^a «Sañudo, citando algun ome, o embriagado, enfermo de grand enfermedad, o estando sandio, o desmemoriado, de manera, que quisiese *matar á si mismo*, &c.»

En varios proyectos de código criminal, presentados á las legislaturas de los Estados en nuestra República, se ha omitido el suicidio en la clasificacion de los delitos. Tenemos á la vista el que presentaron á la legislatura de Durango en 28 de Febrero de 1848, los Sres. Lics. D. J. Fernando Ramirez, D. José M.^a Hernandez y D. Juan José Zubizar; y en el cap. 1.^o, parte 2.^a que trata de los delitos contra la vida y seguridad de las personas, no se incluye el suicidio. En el proyecto presentado á la de Veraacruz en el mismo año de 1848, por el Sr. Lic. D. J. Julian Tornel, en la tercera parte «Delitos contra las personas,» se ocupa, es verdad, el tit. 1.^o del suicidio. Tres artículos comprende este título: el primero, contra las personas que ayudaren á otra en el acto de suicidarse ó á sabiendas le proporcionaren medios para este objeto, calificándolos de cómplices de homicidio. El 2.^o previene, que no se dé en publico sepultura al cadáver del suicida; prohíbe que se le hagan exequias

fúnebres, que se pongan inscripciones en su sepulcro, y que se borre su nombre de las listas de corporaciones á que haya pertenecido, dejándose de aplicar estas notas infamantes en el caso de justificarse que el delito tuvo lugar á consecuencia de un acto de frenesí ó de locura.

El proyecto de código criminal para el Distrito federal y territorio de la Baja California, formado por los Sres. Lics. D. Antonio Martínez de Castro, D. José M.^a Lafra-gua, D. Manuel O. de Montellano y D. Manuel M. de Zamacona, en Marzo del presente año de 1871, no enumera el suicidio entre los delitos contra las personas: ni podían los ilustrados jurisconsultos redactores del proyecto, calificarlo de tal, según los principios reconocidos que rigen en materia criminal, y que tan sabiamente han explano en la exposición preliminar del código. Cuanto pudiéramos decir, está dicho: cuanto pudiéramos exponer, está expuesto en dicho proyecto.

Según el derecho canónico, se priva de la sepultura á varios delincuentes; entre otros, á los que en la edad de la razón se matan por desesperación, ó por cualquiera otra causa. Esta rigidez canónica ha sido templada en nuestros tiempos por la prudencia de los prelados y vicarios eclesiásticos, quienes solo niegan su ministerio á los que con escándalo mueren impenitentes. En los otros casos, siguiendo el espíritu de caridad y misericordia de la Iglesia, no niegan la sepultura á los demás exceptuados, que no habiendo renegado de su fe, se consideran piadosamente muertos en la comunión y seno de la unidad católica. Esta conducta circunspecta es también conforme al principio reconocido de que *In dubiis odiosa sunt restringenda*.

Consideramos, pues, el suicidio como una desgracia lamentable, y no como un delito: lo consideramos como un extravío funesto de la razón, de tristes y lamentables consecuencias.

La teoría de los delitos de fuero mixto, llamados así porque eran penados por las leyes canónicas y las leyes civiles, y calificados bajo su aspecto moral y social, ha desaparecido de los códigos modernos. La separación de la responsabilidad de conciencia, y de la que puede contraer el individuo para con la sociedad respecto de sus actos, ha venido á definir exactamente los deberes del fuero interno de los del fuero externo: ha

dejado fuera de la sanción civil las faltas é infracciones del individuo como creyente; y el suicidio que ántes fué uno de los delitos de mixto fuero, anatematizado por la Iglesia y penado por la ley criminal, ha desaparecido de la legislación moderna. La autoridad temporal, respetando la conciencia y la creencia de los ciudadanos, reconoce los justos límites de su imperio; ejerce una misión propia, que no la recibe sino de la sociedad misma, sin escuchar más inspiraciones que las de la razón, y las de la conveniencia social en bien de los pueblos.

No es delito el suicidio, porque para que haya una acción justificable por la justicia humana, es preciso entre otras circunstancias, que el mal causado sea en perjuicio de tercera persona; que pueda ser castigado, y que haya utilidad social en castigarlo; y desde luego, ninguno de estos requisitos concurren en el suicidio. El suicida no ofende á otra persona, sino á sí mismo, privándose de la vida: no puede ser castigado, porque la muerte extingue toda responsabilidad criminal: ¿qué utilidad social hay en infamar la memoria del que fué y no es ya? Ninguna absolutamente, á no ser que en nuestros tiempos se pretenda aun sostener la teoría de las penas infamantes; que se resucite el odioso y repugnante proceso á los cadáveres exhumándolos, mutilándolos, como lo hizo el Papa Esteban VI contra Formoso su antecesor.

Nos contraemos á la infamia legal, no á la infamia que traen consigo ciertas acciones vituperables é inmorales ante la conciencia pública: ésta, no necesita de ley escrita que le puntualice ciertos hechos como indignos de todo hombre honrado; basta la razón natural para reprobarlos: basta el conocimiento de nuestra propia dignidad para calificarlos. Hay, pues, acciones que no puede sancionar ni aprobar el buen sentido, ni una sociedad medianamente ilustrada, y que sin embargo, no puede la ley escrita anatematizar y castigar con penas, sin faltar á todas las reglas de la ciencia, y á todos los principios que rigen en materia de delitos y penas.

Tengamos presente que nuestra Constitución política de 1857, en su art. 227, prohíbe para siempre las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas, ó trascendentales."

Reprobamos el suicidio, así como otros he-

chos no menos repugnantes á la moral: y deseamos que la educación, el conocimiento de los deberes morales, el ejemplo, y los consejos de los padres de familia á sus hijos, sean el medio de corregir esta manía

funesta que conmueve los ánimos, que cubre de luto y llanto á las familias, y que al ver la tumba de uno de estos desgraciados solo podemos decir: *«Parce sepulchrum.»*
J. BIVIANO BELTRAN.

JURISPRUDENCIA

JUZGADO 1º DE LO CIVIL.

Preferencia de derechos por adjudicación de bienes nacionalizados.—El indulto concedido á los denunciados que devolvieron al clero, fué sin perjuicio de tercero. Los subarrendatarios solo han podido subrogarse en los derechos de los arrendatarios, dentro de los tres meses concedidos á estos para la adjudicación.

México, Julio 12 de 1871.

Vistos estos voluminosos é informes autos, que sobre preferencia de derechos de propiedad á la casa núm. 28 de la calle del Hospicio de San Nicolás de esta ciudad, han seguido los Sres. Don J., D.^a M. y D.^a D. M., Don J. S. B., y Don J. I. L. Vistas las pruebas y alegatos que cada una de las partes han producido para sostener su preferencia, y todo lo demás que consta en autos y verse debía.

Considerando: que si bien los Sres. M., como arrendatarios de la casa citada á la publicación de la ley de 25 de Junio de 1856, tuvieron derecho con arreglo á su artículo primero, de adjudicársela como lo hicieron, y adquirieron su propiedad; también es cierto, que desde el momento en que la devolvieron al clero, obediendo las leyes de la Administración Zuloaga, la perdieron, y los derechos de adjudicatarios por el art. 9º del decreto de 5 de Febrero de 861; y los perdieron, así porque Don J. M. por su sexo, no es de las personas comprendidas en la excepción que contiene el art. 5º, como porque sus hermanas que podrían decirse comprendidas en ella, no pueden gozar del indulto concedido en el mismo art. 5º porque se causaría un perjuicio de tercero, expresamente prohibido por el decreto de 23 de Febrero del mismo año de 861, aclaratorio del de 5 citado ántes; puesto que, como se demostrará adelante, desde 858 ya existía una denun-

cia válida y legal, reconocida y calificada por el Supremo Gobierno en sus acuerdos de 20 de Febrero y 27 de Marzo de de 861, que se ven en la copia del expediente formado en el Ministerio de Hacienda y corriente en estos autos de la foja 24 á la 26 del cuaderno de pruebas de L.

Considerando respecto de D. J. S. B., subarrendatario de la casa citada: que los subarrendatarios, según el art. 10 de la ley de 25 de Junio, solo podían subrogarse en los derechos de los arrendatarios principales, cuando estos dejaban trascurrir los tres meses que el mismo artículo les concedió para que formularan la adjudicación á su favor; y de tal manera quiso la ley ese lapso material, que en las tres diversas resoluciones de 20 de Setiembre de 856 (marcadas con los números 32, 34 y 70 en la memoria Lerdo) aclaratorias del art. 10 citado, se dice expresamente, que *solo pasados* esos tres meses señalados en la ley, puede el subarrendatario adquirir los derechos del arrendatario; llevando la ley su rigor á tal extremo, que en la núm. 70 declaró nula la adjudicación hecha y consumada dentro de los tres meses á un sub-inquilino, y en la núm. 34, que, corriendo ese término, no puede hacerse adjudicación á *nadie*, aun cuando el arrendatario principal diga que renuncia sus derechos, porque puede variar y hacer uso de ellos hasta el último instante del término; de todo lo cual se sigue, que cualquiera que fuese la fecha de la denuncia de D. J. S. B., dentro de los tres meses concedidos á los M., como arrendatarios principales, ningunos derechos de denunciante ó de preferencia pudo haber adquirido aquel, porque esos tres meses estaban consagrados única y exclusivamente á los arrendatarios y no á otras personas.

Considerando: que aunque B. alega la nuli-